

**DELITO : RECEPTACION DE VEHICULO MOTORIZADO**  
**RUC N° : 2001083594-2**  
**RIT N° : 75- 2023**  
**ACUSADO : VICTOR ALFONSO MADARIAGA BARRERA**

Santiago, a ocho de abril de dos mil veinticuatro.

**VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO: Tribunal e intervinientes.** Que, el día tres de abril de dos mil veinticuatro, ante esta Sala del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por las juezas Rocío Morales Hernández, Erika Villegas Pavlich y Andrea Coppa Hermosilla, se desarrolló la audiencia de juicio oral en causa RUC N°2001083594-2, RIT N°75-2023, seguida en contra de **VICTOR ALFONSO MADARIAGA BARRERA**, cédula nacional de Identidad N°16.246.605-4, nacido en Santiago, el 17 de julio de 1985, 38 años, soltero, conductor de Uber, domiciliado en calle Ángel Pimentel N°457, Población San Pedro, comuna de Puente Alto.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público, representado por el fiscal Rodrigo Moya Acevedo, en tanto que la representación del acusado fue asumida por la defensora penal pública, Marcia Durán González, ambos con domicilios y forma de notificación ya registrados en el Tribunal.

**SEGUNDO: Acusación:** Que los hechos materia de la acusación, según se lee en el auto de apertura, son los siguientes: *“El día 24 de octubre de 2020, aproximadamente a las 19.15 horas, funcionarios policiales de la brigada de investigación criminal de Maipú, encontrándose en la intersección de calle Santiago Bueras con intersección calle Manuel Rodríguez, en la comuna de Maipú, proceden a realizar un control vehicular al automóvil marca KIA que mantenía adosada la placa patente única NL-1744, debido a que al consultar dicha patente, ésta no corresponde al modelo del vehículo sino que a un automóvil de marca FIAT. De esta manera, el vehículo de marca KIA en el que se desplazaban los acusados debía mantener la placa patente única BFWF.31.*

*Por lo anterior, funcionarios de investigación proceden a realizar una fiscalización, logrando constatar que se encontraba como conductor y en poder del vehículo marca KIA, el acusado Víctor Alfonso Madariaga Barrera. Dicho vehículo, al ser consultado, mantenía encargo vigente por el delito de robo formulado con fecha 28 de agosto de 2020, ante la 31ª Comisaría de San Ramón, numero de encargo EUN 400277, realizado por la víctima de iniciales H.A.G.R., por lo que el acusado conocía o no podía menos que conocer el origen*

*ilícito de la especie que mantenía en su poder y que este conducía. De esta manera, el vehículo de marca KIA que circulaba que mantenía la placa patente única NL-1744, como se relató, debía mantener la placa patente correspondiente a su modelo, la cual fue individualizada como la placa patente única BFWF.31, sabiendo el imputado mencionado, que el vehículo que conducía mantenía sus placas patentes que correspondían a otro vehículo.*

*El acusado Víctor Madariaga Barrera, era acompañado por los acusados Alex del Carmen Pérez Neculmán, Darío Abraham Retamal Mejías, y por los imputados Fabián Andrés Zúñiga Ñanculipe, y Carlos Antonio Farías Pérez”.*

A juicio de la Fiscalía los hechos antes descritos son constitutivos del delito de conducción de vehículo, a sabiendas, con placas patentes correspondientes a otro vehículo, previsto y sancionado en el artículo 192 letra E, de la ley de tránsito, y receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del código penal, ambos en grado de ejecución consumado, correspondiéndole al acusado participación en calidad de autor, en los términos previstos en el artículo 15 N°1 del Código Penal, toda vez que ha tomado parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa.

A juicio de la Fiscalía, respecto del acusado concurre las circunstancias modificatorias de responsabilidad contempladas en el artículo 12 N°15 y N°16 del Código Penal, por lo que, solicita que se condene al acusado a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, suspensión de la licencia de conducir por el término de 5 años y multa de 50 unidades tributarias mensuales, como autor del delito de conducción de vehículo, a sabiendas, con placas patentes correspondientes a otro vehículo; y a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 5 unidades tributarias mensuales, por el delito de receptación de vehículo motorizado. Se solicitan además las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y el pago de las costas de la causa.

**TERCERO: Alegatos de apertura y clausura:** Que **el Ministerio Público, en su alegato de apertura**, indicó que el tribunal conocerá los hechos de la acusación, ocurridos el 24 de octubre de 2020, en un procedimiento de control vehicular a un vehículo marca Kia que circulaba con una patente distinta de la correspondiente. Los funcionarios fiscalizan al conductor y demás ocupantes, allí también verifican que el vehículo tenía un encargo por robo en bien nacional de uso público. Vienen al juicio dos funcionarios policiales, que darán cuenta del procedimiento, de la fiscalización y como detectan ambos delitos, quien conduce el vehículo era el acusado presente. Además, declarará el dueño del vehículo, quien fue víctima del robo y el funcionario que recibió la denuncia por el robo en bienes nacionales de

uso público. Además, se contará con prueba pericial del vehículo y documental para acreditar la propiedad del mismo, sumado a fotos del sitio del suceso. Con ello, se acreditará el hecho y la participación del acusado. Señala que la defensa seguramente pedirá absolución, alegando falta del elemento subjetivo, pero estima que la prueba permitirá acreditar el conocimiento o que el acusado obró no habiendo podido menos que conocer el origen ilícito del vehículo.

La **defensa, en su alegato de apertura**, señaló que trae una teoría absolutoria sobre ambos delitos, porque su representado es chofer de Uber, él estaba realizando dicha acción, y fue detenido con pasajeros ese día, el auto se le facilitó para realizar dicha labor, no pudiendo conocer el origen ilícito, no sabía que las patentes no eran las del auto. El auto era de su pareja, y se adquirió lícitamente en septiembre de 2020 a través de notario público, sin que supiera su pareja del encargo por robo. Por ello pide absolución por ambos delitos.

En su **alegato de clausura, el Fiscal** refirió que se acreditaron los hechos de la acusación, que el día 24 de octubre de 2020, los funcionarios de la PDI que depusieron en la audiencia dieron cuenta de haber visto un Kia Rio, que llevaba a cinco personas en su interior, verificando que la patente no correspondía a la marca y al tipo de vehículo, por haberlo consultado, por lo que hicieron un seguimiento y los trataron de fiscalizar, lugar donde los sujetos tratan de darse a la fuga, sin lograrlo por haber impactado el vehículo al carro policial, causando daños que fueron ratificados por el denunciante, allí se les detiene a los cinco, cuatro de ellos portaban objetos propios de la comisión de delitos, armas de fuego, cartuchos, un arma a fogueo, guantes, gas pimienta y placas falsas de PDI, los restantes detenidos ya fueron condenados por esos delitos. Al acusado se le imputa la receptación y la conducción con patente que corresponde a otro vehículo. La prueba de la defensa no ha permitido desacreditar la de cargo, en cuanto al conocimiento que tenía o debía tener el acusado respecto del origen ilícito del vehículo, el cual se acreditó con la declaración de Gallardo Rivas, quien denunció el robo del vehículo de su madre en San Ramón, sumado a la documental que da cuenta del encargo policial, y al certificado de inscripción del vehículo robado y también de aquel al cual correspondían las patentes que portaba el vehículo al momento de la fiscalización. En la hoja de vida del conductor, se advierte que el acusado no pudo dedicarse a esa actividad ya que desde 2006 en adelante tiene denegada la licencia de conducir, por lo que pide condena por el delito previsto en el artículo 192 letra E de la ley de tránsito, sumado a la receptación de vehículo.

En su **alegato de clausura, la defensa** manifestó que con los dos policías se estableció que el día de los hechos se realizó un procedimiento donde fue detenido su representado, en conjunto con otros cuatro sujetos, su representado conducía el vehículo y

los demás individuos llevaban ocultos en sus vestimentas o bolso objetos para cometer delitos, pero su representado no tenía nada. La pareja del acusado indico haber adquirido el vehículo a su vecino Daniel Rojas, ella va a la notaría, se firman los papeles y se pagan dos millones y medio, pero sin saber que el vehículo podría a estar involucrado con algún delito. El vehículo lo manejaba su hijo, porque no sabían que el auto tenía problemas con la ley. Cuando éste se va, su representado empieza a hacer carreras en el auto a sus vecinos, y lo utilizaba para ayudarla en su tarea de comerciante ambulante. Daniel Rojas fue luego detenido, porque se dedicaba de modo permanente a la compra y venta de autos. Su representado no sabía que el auto era robado, lo adquirió de manera lícita, no tenía signos de fuerza, ni chapa y se encendía con su propia llave, lo que haría entender a cualquier persona que el auto tiene origen lícito. Insiste en la inocencia de su representado y se absuelva.

En su **réplica, el ministerio público**, señaló que los dichos de la defensa no tienen ninguna corroboración en ningún otro elemento de prueba rendido en juicio.

La defensa no hizo uso de su derecho a replicar.

**CUARTO: Autodefensa.** El acusado **VICTOR ALFONSO MADARIAGA BARRERA** guardó silencio y optó por no declarar.

**QUINTO: Convenciones probatorias.** Que del auto de apertura de juicio oral se desprende que los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

**SEXTO: Prueba rendida en el juicio.** A fin de acreditar los presupuestos fácticos de la acusación, depuso en estrado **HERNÁN ALEJANDRO GALLARDO RIVAS**, quien manifestó que a él le robaron el auto, un día en la tarde cuando iba camino a la feria, dejó el auto estacionado un par de autos más atrás de la feria porque había mucha gente, con seguro y alarma, fue y volvió a los cinco minutos y ya no estaba, llamó a la policía de San Ramón y puso los avisos correspondientes de que había sufrido un robo. Era un Kia Rio plateado. Era el auto de su mamá, lo tenía desde hace hartos años, cinco o seis años atrás. No recuerda en que año ocurrió esto. Gente le dio aviso de que lo habían visto circulando por distintas partes, hasta que un día le avisaron que estaba en Maipú y que la PDI lo había encontrado. Lo fueron a buscar y estaba en mal estado, estaba chocado en la parte trasera del acompañante y casi desmantelado por dentro. La patente era BFWF, pero no recuerda el número.

Enseguida, testificó el **Comisario de la Policía de Investigaciones JORGE ALEJANDRO ULLOA MARTÍNEZ**, quien manifestó que el 24 de octubre de 2020, a las 19:15 horas, estaba a cargo de un equipo y realizaban diligencias propias de su unidad,

momento en el que ven en tránsito un vehículo Kia Rio, ocupado por cinco personas, y al mirar la placa patente, NL1744, notan que ésta no correspondía al año del vehículo, por lo que la consultan y el sistema les da como resultado que pertenece a un Fiat Uno, color azul, vehículo distinto al que ellos veían, por lo que se configuraba un delito de conducción con placa patente falsa flagrante. Por el número de personas, se coordinaron con otro carro para poder detenerlos, y a eso de las 19:50 horas los detienen, al registrarlos, encuentran que estos portaban armas de fuego, placas falsas de la PDI, guantes de goma, gas pimienta, y además el vehículo no tenía su documentación. Los detuvieron a los cinco. Los llevaron al cuartel y solicitaron pericias al vehículo, el perito les confirmó que la patente correcta era la BFWF31, que tenía encargo por robo, de la subcomisaria de San Ramón, del 28 de agosto de 2020, donde el denunciante era alguien de nombre Hernán, hijo de la dueña, quien indicó que fue a una feria y cuando volvió el auto ya no estaba, por lo que denunció ese mismo día. Víctor Madariaga era el conductor del vehículo, Fabián Zúñiga iba de copiloto, atrás iban Darío Retamal Mejías, Alex Pérez y Carlos, no recuerda el apellido. Madariaga tenía tez blanca, pelo corto y contextura mediana. Lo reconoce en la audiencia. Explica que Darío iba sentado atrás de conductor, portaba un arma en el cinto y cartuchos, en un estuche, en el bolsillo, Zúñiga llevaba un bolso negro con guantes de goma, de los que iban atrás, el que iba sentado en el medio, lo hacía sobre la pistola de fogeo Bruni, y llevaba además guantes y gas pimienta, y el otro iba sentado sobre las placas falsas, guardadas en una bolsa.

A continuación, declaró el **Inspector de la Policía de Investigaciones JORGE IVÁN FLORES MARAMBIO**, quien expuso que el 2020, el 24 de octubre, estaba en la Bricrim Maipú en un grupo de investigaciones de largo aliento, realizando diligencias del área, y ven un auto que circulaba, un Kia Rio, patente NL1744, al verlo, se dieron cuenta de que era utilizado por cinco personas a bordo, eso les generó sospecha, por lo que consultaron la patente y advierten que la patente pertenecía a un vehículo Fiat, y no al que ellos veían. Se le hizo un pequeño seguimiento por la comuna de Maipú, y fue detenido en la intersección de Santiago Bueras con Manuel Rodríguez, Maipú. Al identificarse como PDI el vehículo intenta darse a la fuga, dándole un vuelco al vehículo institucional, ellos se bajan, los siguen, y logran darles alcance, y los reducen. Los fiscalizaron y revisaron sus vestimentas, y varios de ellos portaban armas de fuego, guantes y otros artículos para detener personas, como gas lacrimógeno, y en la parte posterior de los asientos, hallaron un bolso color negro con unas placas institucionales, que se notaba eran falsas. El conductor corresponde a Víctor Madariaga, que no portaba ningún elemento de estos, pero era quien conducía. En el asiento de atrás iba Darío Retamal, que llevaba 32 cartuchos 9 mm y un arma de fuego, y además otras dos personas, que también tenían guantes y armas, aparentemente de fuego. Luego fueron a la unidad policial, y allí ratificaron las identidades de los involucrados. Se les

preguntó justificación de los elementos que portaban y del vehículo robado y no dieron repuesta. Como la patente no correspondía al vehículo, pidieron concurrencia del perito, quien detectó que la verdadera patente del vehículo Kia Rio era BFWF31, que había sido robado ese mismo año en San Ramón, a una persona que fue a una feria libre, se estacionó y cuando volvió ya no estaba su vehículo. Además, solicitaron la intervención de peritos balísticos, para verificar la naturaleza y estado de las armas, concluyéndose que una era real y la otra a fogeo. Se contactaron con el fiscal de turno, quien ordenó realizar la documentación y poner a los imputados a disposición del tribunal.

Explicó que ellos como policías iban en dos vehículos, un carro A10074, donde circulaba él con el Subcomisario Jorge Ulloa, y en el otro, carro C6983, lo hacía el Inspector José Salazar, el detective Abel Cartes y el subinspector Álvaro Villamán. Los sujetos trataron de huir e impactaron la camioneta institucional y allí fueron interceptados. Él se quedó en el auto, atento a lo que sucediera, y los demás se bajaron a reducir a los sujetos. Carlos Zúñiga iba de copiloto, y atrás iba Darío Retamal. Reconoce al acusado en audiencia.

Se le exhibe el **set fotográfico individualizado como N°1**, y expone que la Foto 1, muestra la señalética de la intersección entre las calles Santiago Bueras y Manuel Rodríguez, la Foto 2, corresponde a la intersección de esas mismas calles, que fue el lugar del detención, la Foto 3, muestra el vehículo Kia Rio, desde su parte trasera, llevando la patente NL 1744, aclarando que esa no corresponde a este vehículo sino a uno Fiat, y que en la parte final se ve la camioneta institucional que fue chocada, la Foto 4, muestra el vehículo Kia Río con la puerta delantera abierta, la Foto 5 corresponde al habitáculo del piloto, la Foto 6, muestra los asientos traseros, en el interior del auto se ve una mochila, con los objetos para la comisión de delitos, guantes y gas pimienta, además de una bolsa negra con la placas falsas institucionales, la Foto 7, corresponde una mochila y un arma, la Foto 8 corresponde a la bolsa negra con dos placas PDI falsas, la Foto 9 muestra el rostro de Darío Retamal, quien iba sentado detrás del piloto, y tenía un arma marca Taurus, color gris, con un bolsa y 32 cartuchos 9mm, la Foto 10 muestra el arma Taurus 9 mm, con su cargador, la Foto 11 muestra parte de la evidencia, el arma Taurus gris, y otra negra de fogeo, más unos guantes, la Foto 12, muestra las dos placas falsas y la bolsa negra.

Asimismo, se le exhibió el **set fotográfico individualizado como N°4**, señalando que la Foto N°1, muestra el encargo nacional de robo, donde se consigna como denunciante a Hernán Eduardo Gallardo Rivas, realizado ante la subcomisaria de San Ramón, el 28 de agosto de 2020, las Foto N°2 y N°3, corresponde al detalle del mismo encargo, donde le asigna al denunciante el N°1787818, y se individualiza el automóvil como Kia Motors, Rio JB

EX 1.4, color plateado plata claro, inscrito a nombre de María Ofelia, quien sería la madre del denunciante.

Ante las preguntas de la defensa, señala que ellos ven el vehículo cuando estaba en movimiento, y por ello lo siguen, mientras van consultando la patente, cuando el vehículo se detiene en el semáforo, ellos se bajan y se identifican para fiscalizarlo, y en ese momento se dan a la fuga, colisionando con el vehículo institucional, por lo que ellos le dan alcance a pie. No recuerda quien hizo el set fotográfico. El vehículo fiscalizado no tenía signos de fuerza, según recuerda, y no sabe si estaba funcionando con llaves. Los objetos incautados estaban ocultos en una mochila y un bolso.

Más adelante testificó el **Sargento 1° de Carabineros, perteneciente a la 31ª Comisaria San Ramón, OSVALDO TOMAS COÑUMIL QUIÑIMIL**, quien expuso que el 8 de agosto de 2020, a eso de las 15:15 horas, mientras estaba de guardia, llegó al lugar una víctima por un robo de vehículo, identificado como Hernán Alejandro Gallardo Rivas, de 29 años, chileno, soltero, empleado, que dijo que ese día, a eso de las 13:00 horas, había ido a la feria en San Ramón, en calle Pedro Aguirre Cerda con Lorena Beltrán, y dejó estacionado su Kia Rio, plateado, patente BFWF31, por unos veinte minutos aproximadamente, mientras compraba, y al regresar, vio que desconocidos le habían sustraído el vehículo, ignorando más antecedentes del hecho, además desconocía si en el lugar existían cámaras, añadiendo que el avalúo correspondía a \$4.000.000.- y que dentro del vehículo, tenía toda la documentación. Se hizo el encargo correspondiente en la plataforma y el denunciante quedó en espera de citación al tribunal.

Luego, declaró el **perito mecánico del LACRIM Central, JULIO CRISTIAN FUENTES MIRANDA**, quien indicó haber realizado el informe técnico del vehículo de placa patente única BFWF-31, y el informe pericial mecánico del mismo, indicando que es Ingeniero mecánico de profesión y que cuenta con veintitrés años de servicio. Explicó que el 24 de octubre de 2020, la Bricrim Maipú le pide que realice inspección a un Kia Rio, patente NL1744. Al revisarlo, observa que éste estaba en regular estado de conservación, porque tenía daños en el sector delantero de la carrocería. Revisa también tanto el número de motor como el de chasis, concluyendo que no tenían señales de manipulación ni adulteración, por lo que eran originales. Al consultar la patente, determinó que pertenecía a otro auto, uno Fiat Uno. Además, buscó las series de números de motor y chasis en el registro de vehículos motorizados y obtuvo que la verdadera patente del automóvil era BFWF31.

Se le exhibe el **set fotográfico individualizado como N°3**, explicando que la Foto 1, muestra el vehículo en su parte delantera, y sobre el capot, está la patente, la Foto 2, corresponde a la parte trasera, con la patente metálica instalada NL1744, la Foto 3, muestra

el número de motor del vehículo G4EE7H099642, la Foto 4 corresponde al número de chasis, que contiene 17 caracteres, y el primero “K” es porque es de origen coreano, la Foto 5, corresponde a la inscripción del vehículo, donde consta el número de motor y de chasis, y su color plateado. No recuerda si tenía signos de fuerza o si partía con las llaves.

Asimismo, se rindió como **prueba documental** la siguiente: **1. Encargo del vehículo de placa patente única BFWF-31, nro. SEBV\_200910\_3483**, 08.08.2020, vehículo fue robado en Gabriela Mistral con Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Kia Rio, color gris. 2008, Hernán Alejandro Gallardo Rivas, propietario Mario Ofelia Rivas González, **2. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro Vehicular Motorizado, respecto de la inscripción NL.1744-6**, 1995, Fiat Uno, color azul capri, José Carlos Muñoz Puga. **3. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro Vehicular Motorizado, respecto de la inscripción BFWF.31-0**, Kia Rio, plateado, propietario María Ofelia Rivas González. **4. Hoja de vida del conductor respecto del acusado Víctor Madariaga Barrera** expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, licencia conducir denegada, infracción conducir sin licencia.

Finalmente, la defensa rindió la testimonial de **Valeska Andrea Sánchez Sandoval**, conviviente del acusado, quien manifestó que el día 28 de septiembre de 2020, en pandemia, ella le compró un auto a su vecino, fueron a la notaría y allí firmaron los papeles, ella le dio en efectivo dos millones y medio, esto fue en La Cisterna. Ella usaba el auto en su trabajo, ya que vende loza en la feria, también lo manejaba su hijo Matías Nicolás Zabala Sánchez, él tenía licencia y le manejaba el auto, pero luego, como él tuvo a su hijo, se separó de él y Víctor empezó a usar el auto para hacer carreras a los vecinos, o la llevaba a ella a la feria o al persa, y le ayudaba a armar el puesto, la ayudaba porque a ella se le declaró un cáncer. Un día a ella la llamaron para avisarle que Víctor estaba detenido con los policías de Maipú, ella declaró en esa oportunidad ante la policía lo mismo que ahora, le preguntaron sobre los papeles, dijo que estaban todos en el auto y que ella tenía solo los papeles del contrato que firmó, le dijeron que la iban a llamar y no lo hicieron. Añade que el auto se lo compró a su vecino Daniel Rojas Sepúlveda, con quien tiene seis años de amistad, ya que vive al lado de su casa, y ella mantiene amistad con su señora. Explica que ella es mamá de seis hijos, es analfabeta, por lo que debe ir con su hija mayor para todos lados, porque su hija le lee. Nunca supo que el auto era robado o no se lo habría pasado a su hijo, que no tiene antecedentes penales, solo lo vio como una opción de inversión para su negocio. Lleva con Víctor cinco a seis años de relación. Ese día, ante la policía ella declaró mucho rato, luego Víctor quedó con arresto domiciliario, ambos siguieron trabajando y luego él cayó detenido por un desacato que le puso la mamá de su hija. Actualmente ella no puede entrar a la cárcel, lo tiene prohibido, porque entró con su celular y eso está prohibido, va a cumplir seis



meses con castigo, pero antes si lo iba a ver, desde que está detenido. No recuerda la patente del auto que compró, solo sabe que era un Kia Rio, color plomito, los documentos estaban en el vehículo. Su hija revisó los papeles y los leyó para que ella pudiera firmar. A su vecino lo conoce hace muchos años, unos quince años, el vende y compra autos, arregla y vende autos. Supo que ahora está detenido, parece que, por lo mismo de los autos, el día de la detención iba con dos hombres y con las esposas de ellos, que son los mismos con los que fue a la notaría, sabe que salieron en la televisión, parece que se agarraron a balazos con la policía. Esa vez fue a la notaría con su hija, allá se reunió con Daniel, con dos amigos de Daniel, y con su esposa Soledad.

**SÉPTIMO: Valoración de la prueba y hechos acreditados:** Que los testimonios de los funcionarios aprehensores Ulloa y Flores resultaron coherentes y sus dichos contestes, concordantes y complementarios entre sí, en el sentido de que el día 24 de octubre de 2020 observaron circulando por la vía pública a cinco sujetos a bordo de un vehículo marca Kia, modelo Río, color plateado, que llevaba adosada la patente NL 1744, la que no correspondía al mismo sino a un vehículo marca Fiat, modelo Uno, color azul; sujetos a los cuales quisieron fiscalizar al llegar al semáforo ubicado en la intersección de calles Santiago Bueras con Manuel Rodríguez, pero éstos, al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga en el móvil, impactando al carro policial que los interceptó para impedir la huida, siendo detenidos en dicho lugar, señalando ambos policías que era el acusado Víctor Alfonso Madariaga Barrera quien estaba ubicado en el puesto del conductor, y que, ante las consultas, no dio razón alguna de por qué transitaba en un vehículo cuyas placas patentes pertenecían a otro diverso, además de que el vehículo carecía de toda documentación.

Asimismo, que con el testimonio del perito mecánico del LACRIM Central, Julio Cristian Fuentes Miranda, ha podido establecerse que dicho automóvil, el día de la inspección presentaba daños en su carrocería, y correspondía, según su número de motor y de chasis, a la placa patente única BFWF 31, el cual tenía encargo vigente por robo, como pudo apreciarse de la documental acompañada, lo que fue además refrendado por los dichos de la víctima, Hernán Alejandro Gallardo Rivas, quien manifestó que en agosto del año 2020 le sustrajeron dicho móvil, que meses después tuvo noticias de que este había sido encontrado por la Policía de Investigaciones, con diversos daños y que el avalúo fiscal de este ascendía a \$4.000.000.- , y también por los dichos del funcionario Osvaldo Tomas Coñumil Quiñimil quien recibió la denuncia de este último en dicha oportunidad y dejó el encargo para su búsqueda en el sistema.

Los antecedentes anteriores, fueron refrendados además por las fotografías del sitio del suceso, del vehículo fiscalizado que presentaba daños en su carrocería compatibles con

haber chocado el carro policial que lo interceptó y de las diversas especies incautadas a los ocupantes del mismo, las que fueron exhibidas en audiencia para ilustrar los relatos de los deponentes y ratificaron los dichos de los funcionarios policiales, como también ocurrió con la documental incorporada, resultando, por lo mismo, sus dichos verosímiles y creíbles, pues cada uno dio cuenta de los hechos, de la forma en que se desarrollaron y de cómo tomaron conocimiento de ellos, entrelazándose cada uno de los relatos sin que existieran contradicciones o se advirtiera falta de consistencia entre los mismos, ni que se hayan modificado a lo largo del tiempo, en razón de lo cual aparecen como suficientes para dar por acreditado el núcleo fáctico de los cargos formulados, en el sentido de que el acusado mantenía en su poder un vehículo robado.

Al valorar la prueba de cargo, el tribunal apreció, en primer término, la condición del testigo civil y funcionarios policiales, puesto que se trata de personas que vivenciaron o que observaron directamente los hechos a los que se refieren y que impresionaron como capaces de percibirlos por sus sentidos, por lo que aparecieron como veraces y coherentes y no merecen reproche, debido a que, desde un punto de vista objetivo, estuvieron en condiciones de percibir los hechos en la forma que los han expresado, se han mantenido invariables a lo largo del tiempo y además están respaldados por la restante prueba incorporada, y desde una perspectiva subjetiva, porque no existen elementos que permitan suponer que han faltado a la verdad o han declarado contra el acusado motivados por algún vínculo previo que los haya incitado a perjudicarlo.

Además, dichos testimonios y evidencias no pudieron ser eficazmente controvertidos por la defensa, puesto que, por una parte, el acusado guardó silencio y optó por no declarar en juicio, impidiendo al tribunal conocer las razones que tuvo para darse a la fuga al advertir la presencia de la policía, o por qué llevaba a bordo del vehículo a otros cuatro ocupantes que portaban armas de fuego y de fogueo, municiones, placas identificatorias de la PDI falsas, guantes y gas pimienta.

Y por otra, porque si bien la defensa aportó la declaración de Valeska Andrea Sánchez Sandoval, pareja del acusado, quien dio una versión alternativa de los hechos, referida a que compró el vehículo a su vecino sin saber que éste mantenía encargo por robo, habiendo incluso tomado precauciones al respecto, solicitándole a su hija mayor que la acompañara en el trámite de la notaría, y le leyera los papeles que firmó, puesto que es analfabeta y no sabe ni leer ni escribir, papeles que luego mantuvo siempre en el interior del auto, pese a lo cual -según su versión- ninguna de las dos, ni tampoco su hijo Matías Nicolás Zabala Sánchez ni menos aun el acusado, quienes habrían conducido habitualmente el móvil, habrían advertido que la placa patente adosada al vehículo no correspondía a este, sino a otro cuyas

características de marca, modelo, color y año de fabricación eran completamente diversos, versión que no pudo ser corroborada, por cuanto no se aportó prueba fehaciente de haberse celebrado un contrato de compraventa respecto del vehículo en cuestión, fecha del mismo, partes que intervinieron y monto pagado como contraprestación, pudiendo la defensa haber ofrecido oportunamente el testimonio del vendedor, quien dijo se trataba de su amigo y vecino de la casa de al lado desde hace al menos quince años, haberse acompañado un contrato de compraventa – que se estableció es inexistente- o algún comprobante del pago efectuado, puesto que según indicó la testigo, esta ha sido su teoría de caso desde el momento mismo de la detención de su pareja.

Pero además esta explicación resulta poco creíble, puesto que es inverosímil pensar que el acusado utilizaba el vehículo como chofer de Uber, teniendo denegada la licencia conducir desde al menos el año 2006, o que podría haberse celebrado una compraventa del vehículo ante notario público con documentación que evidentemente no era coincidente en cuanto a la marca, modelo, color, año de fabricación y placa patente del automóvil, sin que ello no hubiera sido advertido por el respectivo ministro de fe, lo que explicaría que la testigo haya celebrado, según expuso, un contrato de naturaleza diversa al de compraventa, cuestión que solo refuerza la idea de que tanto ella como el acusado, eran conocedores del origen ilícito del automóvil.

De este modo, luego de valorar la prueba de cargo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, este tribunal tuvo por acreditado, más allá de toda duda razonable, que: *“El día 24 de octubre de 2020, aproximadamente a las 19.15 horas, funcionarios policiales de la brigada de investigación criminal de Maipú, encontrándose en la intersección de calle Santiago Bueras con intersección calle Manuel Rodríguez, en la comuna de Maipú, proceden a realizar un control vehicular al automóvil marca KIA, que mantenía adosada la placa patente única NL-1744, debido a que al consultar dicha patente, ésta no corresponde al modelo del vehículo sino que a un automóvil de marca FIAT, debiendo mantener el vehículo de marca KIA en el que se desplazaban los acusados, la placa patente única BFWF.31. Por lo anterior, funcionarios de investigación proceden a realizar una fiscalización, logrando constatar que se encontraba como conductor y en poder del vehículo marca KIA, el acusado Víctor Alfonso Madariaga Barrera. Dicho vehículo, al ser consultado, mantenía encargo vigente por el delito de robo formulado en el mes de agosto de 2020, ante la 31ª Comisaría de San Ramón, numero de encargo EUN 400277, realizado por la víctima de iniciales H.A.G.R., por lo que el acusado conocía o no podía menos que conocer el origen ilícito de la especie que mantenía en su poder y que este conducía”.*

**OCTAVO: Calificación Jurídica.** Los hechos establecidos en el considerando séptimo son constitutivos del delito de receptación de vehículo motorizado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, en grado de consumado, por cuanto la prueba rendida, apreciada en la forma dispuesta por la ley, esto es, libremente y sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, permite concluir más allá de toda duda razonable, que concurren copulativamente todos los elementos del referido tipo penal.

Esto, desde que el acusado mantenía en su poder y bajo su custodia una cosa mueble ajena, consistente en el vehículo marca Kia modelo Río, placa patente única BFWF31, que fue robado a su legítimo tenedor, Hernán Alejandro Gallardo Rivas, hijo de María Ofelia Rivas, dueña del vehículo, en la comuna de San Ramón, en agosto de 2020, conociendo el acusado o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de la especie, atendido que éste circulaba sin su documentación, que lo hacía con una placa patente perteneciente a un vehículo diverso, cuyas características eran totalmente distintas, que no era primera vez que lo manejaba, y con el cual intentó darse a la fuga en cuanto advirtió la presencia policial, dejando en evidencia su conocimiento real del origen ilícito del mismo.

En este sentido, si bien es cierto que la sola circunstancia de conducir un vehículo motorizado con placas patentes correspondientes a otro vehículo, a sabiendas de ello, podría bastar para configurar un ilícito por sí mismo - aquel previsto en el artículo 192 letra E de la ley 18.290, de tránsito-, lo cierto es que en este caso particular, dicha circunstancia, que efectivamente ha sido probada en juicio, ha servido al tribunal para fundar y dar por establecido el elemento subjetivo del tipo penal de receptación, que exige conocimiento real o ficto del origen ilícito de la especie, y que en este caso puede desprenderse entre otras razones, por la necesidad del acusado de transitar en el vehículo ocultando la verdadera identidad de este, a fin de no ser descubierto su origen espurio, evidenciando así que tenía conocimiento cierto de aquel; razón por la cual, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal y el principio de non bis in idem, dicha figura penal deberá entenderse subsumida en la de receptación de vehículo motorizado, condenándose al acusado únicamente como autor de este delito, debiendo absolverse por el de conducción de vehículo con patente de otro distinto.

**NOVENO: Participación.** Que la participación penal que le ha correspondido al acusado, en el delito de receptación de vehículo motorizado es en calidad de autor, de conformidad con el artículo 15 N° 1 del Código Penal, por haber tomado parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa, al mantener bajo su esfera de custodia el vehículo robado, el cual portaba una placa patente que correspondía a otro vehículo, cuyas

características eran completamente distintas, y en el cual intentó darse a la fuga, dando cuenta de dicha condición.

Tal participación se estableció fehacientemente a través de la sindicación en estrados efectuada por los funcionarios policiales que fiscalizaron el vehículo y que participaron en la detención del acusado, precisamente cuando se encontraba al volante, aportando en audiencia además su identificación completa, pudiendo establecerse así que el vehículo se encontraba bajo su esfera de resguardo.

**DÉCIMO: Audiencia de determinación de pena.** El Ministerio Público se desiste de las circunstancias agravantes invocadas en la acusación, indicando que no concurren modificatorias en este caso, por lo que modificación su pretensión punitiva y pide cinco años de presidio menor en su grado máximo. Funda su petición en que su extracto da cuenta de varias condenas anteriores, además, si bien se subsumió el segundo el delito en el primero, debe incrementarse el disvalor de la conducta, por lo mismo pide una multa de 10 UTM y con costas. Para acreditar que el acusado no tiene irreprochable conducta anterior, incorpora el Extracto de Filiación y Antecedentes, donde registra varias condenas previas, entre ellas una a tres años y un día, como autor del delito de robo con violencia, dictada por el Juzgado de Garantía de Puente Alto, además de otra a 61 días como autor de desacato, dictada por el mismo tribunal.

A su turno, la defensa indica que no hay modificatorias alegadas, y por ello, puede recorrerse la extensión de la pena íntegramente, pide tres años y un día, precisando que no es beneficiario de penas sustitutivas, debe ser efectiva. Pide igualmente que se consideren los abonos, en cuanto a la multa pide se rebaje más allá del mínimo, por estar privado de libertad y artículo 70 del Código Penal, a 1 UTM. Todo sin costas por haber sido defendido por la defensoría penal pública.

**UNDÉCIMO: Modificatorias de responsabilidad.** Que, habiéndose desistido el Ministerio Público de las circunstancias agravantes invocadas en la acusación, aquellas previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal, se omitirá pronunciamiento por resultar innecesario.

**DUODÉCIMO: Determinación de la pena.** Que, al momento de determinar la sanción a aplicar, debe tenerse presente:

- Que la pena asignada al delito de receptación de vehículo motorizado es de presidio menor en su grado máximo y multa equivalente al valor del avalúo del automóvil;
- Que se trata de un delito de receptación, que se encuentra en grado de consumado, en el que le ha correspondido al acusado responsabilidad en calidad de autor;

- Que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal que considerar, por lo que puede recorrerse toda la extensión de la pena.
- Que no se ha acreditado una mayor extensión del mal causado con el delito, pese a que la especie fue recuperada con daños menores atribuibles al intento de fuga, de manera tal que según lo dispuesto en el artículo 449 del Código Penal, y no concurriendo circunstancias modificatorias de responsabilidad, la pena privativa de libertad se impondrá en su mínimo.
- Que, no habiéndose rendido prueba idónea y suficiente para determinar el avalúo del automóvil receptado, deberá estarse a la multa en los tramos señalados en el inciso tercero del artículo 456 bis A, esto es, de 5 a 20 unidades tributarias mensuales; fijándola el tribunal en su tope mínimo, por no concurrir circunstancias modificatorias que considerar, ni haber acreditado una extensión del daño que pudiese ser mayor al ya contemplado en el tipo penal, rechazándose la solicitud de la defensa en ordena rebajar la multa por debajo del mínimo, por no haber incorporado prueba idónea que dé cuenta de su precaria situación económica, más allá de las presunciones simplemente legales.,

**DÉCIMO TERCERO: Costas.** Atendida la facultad que el inciso final del artículo 47 del Código Procesal Penal confiere al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, se eximirá al sentenciado del pago de las costas de la causa, por cuanto se encuentra privado de libertad por causa diversa y ha sido representado por la Defensoría Penal Pública, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 593 y 600 del Código Orgánico, debe entenderse que posee una precaria situación económica.

**DÉCIMO CUARTO: Cumplimiento de la pena.** Que, atendida la pena a imponer al sentenciado y lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 18.216, no es procedente sustituirla por ninguna otra alternativa, debiendo cumplir ésta íntegramente, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido interrumpidamente privado de libertad por esta causa, entre los días 24 de octubre de 2020 y 22 de diciembre de 2021 y entre el 12 de mayo de 2022 y el 13 de agosto de 2022, que corresponden a 519 días, debiendo descontarse un día de incumplimiento, restando un total de 518 días, según consta del Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ).

Visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 14 N°1, 15 N°1, 21, 24, 25, 26, 28, 50, 432, 456 bis A y 449 del Código Penal; 1, 45, 47, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 344, 346 y 348 del Código Procesal Penal, Ley N°18.216; se declara que:

**I.- Se condena al sentenciado VICTOR ALFONSO MADARIAGA BARRERA, ya individualizado, a sufrir la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado**

**máximo, multa equivalente a cinco Unidades Tributarias Mensuales, más las accesorias del artículo 29 del Código Penal**, esto es, la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito de receptación de vehículo motorizado, en grado de consumado, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, perpetrado en esta ciudad, el día 24 de octubre de 2020.

Para el pago de la multa se concederán diez (10) cuotas mensuales, iguales y sucesivas, que deberán ser enteradas al quinto día del mes siguiente de ejecutoriada esta sentencia. El no pago de una de ellas hará exigible el total.

Si no pagare la multa impuesta se le aplicará por vía de sustitución y apremio la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de Unidad Tributaria Mensual, no pudiendo exceder de los seis meses de privación de libertad.

**II.-** Atendida la pena a imponer al sentenciado y lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 18.216, no es procedente sustituirla por ninguna otra alternativa, debiendo cumplir ésta íntegramente, sirviéndole de abono el tiempo que ha permanecido interrumpidamente privado de libertad por esta causa, entre los días 24 de octubre de 2020 y 22 de diciembre de 2021 y entre el 12 de mayo de 2022 y el 13 de agosto de 2022, que corresponden a 519 días, debiendo descontarse un día de incumplimiento, restando un total de 518 días, según consta del Sistema de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ).

**III.-** Encontrándose privado de libertad el condenado por causa diversa y encontrándose patrocinado por la Defensoría Penal Pública, se le exime del pago de las costas de la causa, según se dijo en el considerando décimo tercero.

**IV.-** Ejecutoriado que sea el presente fallo, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 113 del Código Orgánico Tribunales.

Así también, atendida la pena asignada al delito en comento, debe comunicarse al Servicio Electoral para los efectos del artículo 17 de la ley 18.556, modificada por la ley 20.568.

**V.-** Póngase, en su oportunidad, al sentenciado a disposición del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.

Regístrese y comuníquese oportunamente al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, para su cumplimiento. Hecho, archívese.

**RIT N°75-2023.**

**RUC N°2001083594-2**

Dictada por la Sala integrada por las juezas Rocío Morales Hernández, Erika Villegas Pavlich y Andrea Coppa Hermosilla, todas titulares de este Tribunal. No firma la Magistrada Villegas por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.